**ESTUDIANTES**

La distribución por sexos del alumnado de las universidades refleja la progresiva universalización de la formación superior española. Las mujeres, que suponían el 25% en 1970, se equipararon a los hombres en 1986, para irlos paulatinamente superando. En el curso 2013-14, el 54,4% de las matriculaciones correspondió a las féminas. /EFE

DESAFÍOS La formación superior se ha universalizado en los últimos 30 años, pero debe acometer grandes cambios para situarse entre las mejores del mundo y adaptarse a las exigencias de un entorno globalizado.

El movimiento debe continuar

Rubén González, Madrid

El sistema universitario español ha impulsado durante los últimos 30 años la universalización puesta en marcha con la llegada de la democracia. Al inicio del curso 1986-1987, España contaba con 34 universidades y un alumnado de poco más de 850.000 alumnos, repartido a partes iguales entre hombres y mujeres. El 64% de los matriculados optaba por licenciaturas de Humanidades y Ciencias Sociales, mientras que las carreras técnicas atraían a un 14%.

Desde entonces, la población con estudios universitarios casi se ha du-

plicado, con 1,5 millones de estudiantes al inicio del curso 2013-2014 (último del que se tienen datos) en las 83 instituciones del país. Las mujeres han tomado la delantera en las aulas (ya suponen el 54,4% del alumnado) y, aunque las titulaciones de letras (Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho) siguen siendo las más demandadas (representan el 23% de las matriculaciones), se ha reducido la distancia que las separa de las relacionadas con las Ciencias de la Salud y los Servicios Sociales (19%) y las ingenierías (17%).

Esta profunda transformación ha permitido que España se sitúe en los

niveles de la OCDE en cuanto a población de 25 a 64 años con estudios universitarios (con un 32%), superando a países como Italia (16%), Alemania (28%) o Francia (31%). Además, España figura por delante si se analiza únicamente a la población de 35 a 44 años, donde la proporción de titulados universitarios alcanza el 37%, tres puntos por encima de la media de los países más ricos.

Los cambios registrados durante estas tres décadas han sido muy profundos y, sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para situar la formación universitaria española a la altura de las mejores del

mundo. En 2013, el entonces ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, encargó a un grupo de expertos la elaboración de un estudio sobre las principales reformas que habían de llevarse a cabo en el ámbito de la educación superior. “En aquel informe se hablaba de los esfuerzos que paulatinamente había realizado la universidad pública a lo largo de la democracia, que son muchos, pero también de los aspectos en los que necesita mejorar de una forma clara”, explica Rafael Puyol, presidente del Patronato de IE University, ex rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y

miembro de aquel grupo de expertos, conocido como la *Comisión Wert*.

El primer aspecto a abordar, según este comité de sabios, sería la puesta en marcha de nuevos sistemas de gobierno en las universidades, “ya que los actuales proceden de 1983 y están obsoletos”, indica Puyol. Se trataría, en su opinión, de experimentar con otras fórmulas de gestión que cambien aspectos como el modo en que se elige a los rectores e impliquen una mayor participación de la sociedad.

Algo similar proponía la comisión para la elección del personal docente, recomendando procedimientos “que permitan una selección mucho más objetiva” y, de paso, “reducir la endogamia del profesorado”, añade Puyol. En cuanto a las titulaciones, se abogaba por una reestructuración de las más de 6.000 existentes, “muchas de ellas carentes de unos contenidos mínimos y repetitivas”, así como su homogeneización a nivel nacional.

> Pasa a pág. 6

Tres décadas de universidad

Julio L. Martínez Rector de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-Icade

Los últimos treinta años de educación universitaria en España vienen marcados, desde el punto de vista legislativo, por tres normas. La Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria (LRU) introdujo a la universidad en la etapa constitucional. Su principal logro fue la universalización de la enseñanza superior de la mano de la expansión de la oferta educativa, abriendo la universidad a distintos sectores de población, hasta el punto de que, durante su vigencia, prácticamente se dobló el número de plazas universitarias y creció significativamente el número de universidades, tanto públicas como privadas. Otros aspectos destacables de este período fueron el impulso de la producción científica y la dimensión investigadora, y la transferencia de las competencias en materia de educación superior a las Comunidades Autónomas. Aunque no poco criticada, cabe concederle a la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (LOU)

el mérito de haber articulado el sistema universitario español a través de una exhaustiva estructura jurídica. Si la LOU ayudó a preparar la implantación en España del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES, el llamado proceso de Bolonia), es el RD 1393/2007 el que realmente propicia su desarrollo en España. El EEES ha dado impulso a la Europa del conocimiento, mediante la armonización en la educación superior y el incremento de la competitividad universitaria europea frente al resto del mundo, aspirando a mejorar la empleabilidad de sus egresados. Probablemente las metas no han alcanzado los niveles deseados, pero en estos casi 10 años de vigencia se ha avanzado mucho en la diferenciación de la oferta formativa y el grado de internacionalización; también se ha activado considerablemente la reflexión sobre la función docente, sus objetivos y sus métodos.

El conjunto del sistema universitario español con sus más de ochenta universidades públicas y privadas ha progresado mucho, pero no debe detener su avance. Los estudiantes se distinguen por su elevada adquisición de competencias científico-técnicas, pero no tanto por el aprendizaje de otras competencias requeridas para el desarrollo profesional y humano, como la adaptación al cambio, el trabajo en equipo, el sentido humanista de las profesiones o la capacidad comunicativa o emprendedora.

Necesitamos modelos formativos que atraigan talento internacional y hagan crecer a los estudiantes integralmente. Hay que potenciar la formación de posgrado y continua, aún limitada, e impulsar una colaboración más intensa y creativa entre el mundo universitario y el mundo empresarial. Debemos seguir mejorando los sistemas de acreditación de calidad, sin excesos burocráticos y con una orientación que asegure el cumplimiento de rigurosos estándares en la comprobación de los resultados de aprendizaje.

Esta excelencia ha de alcanzar al profesorado, por lo que será imprescindible profundizar en procedimientos de reclutamiento y relevo de

docentes que garanticen su idoneidad. Un mayor grado de competencia de las universidades requerirá que una parte de ellas siga una senda de especialización en su oferta docente y empeño investigador. Así será posible aumentar la producción científica y su impacto, y, consecuentemente, la captación de recursos privados para la investigación. La

Hay que impulsar una colaboración más intensa y creativa entre los ámbitos universitario y empresarial

capacidad de innovación y transferencia de las universidades puede dar aún mucho de sí en beneficio de las transformaciones culturales, económicas y sociales que precisamos. En el complejo cambio de era que vivimos, creo que por esas vías la universidad desempeñará un decisivo liderazgo de servicio a la sociedad.

< Viene de pág. 4

En materia de financiación, la comisión alertaba de la necesidad de llevar al 3% del PIB la inversión pública en la universidad (actualmente no llega al 2%) y recuperar las subvenciones perdidas y los recursos destinados a becas y ayudas. “España dedica el 0,1% de su PIB a este concepto, mientras que la media de la OCDE es del 0,3%”, indica Segundo Píriz, presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). Además, “hace una década se estableció que un 10% de la financiación de las universidades debía estar ligada a sus resultados, algo que se ha ido olvidando y que habría que retomar, condicionando los recursos recibidos a los resultados”, opina Francisco Michavila, director de la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

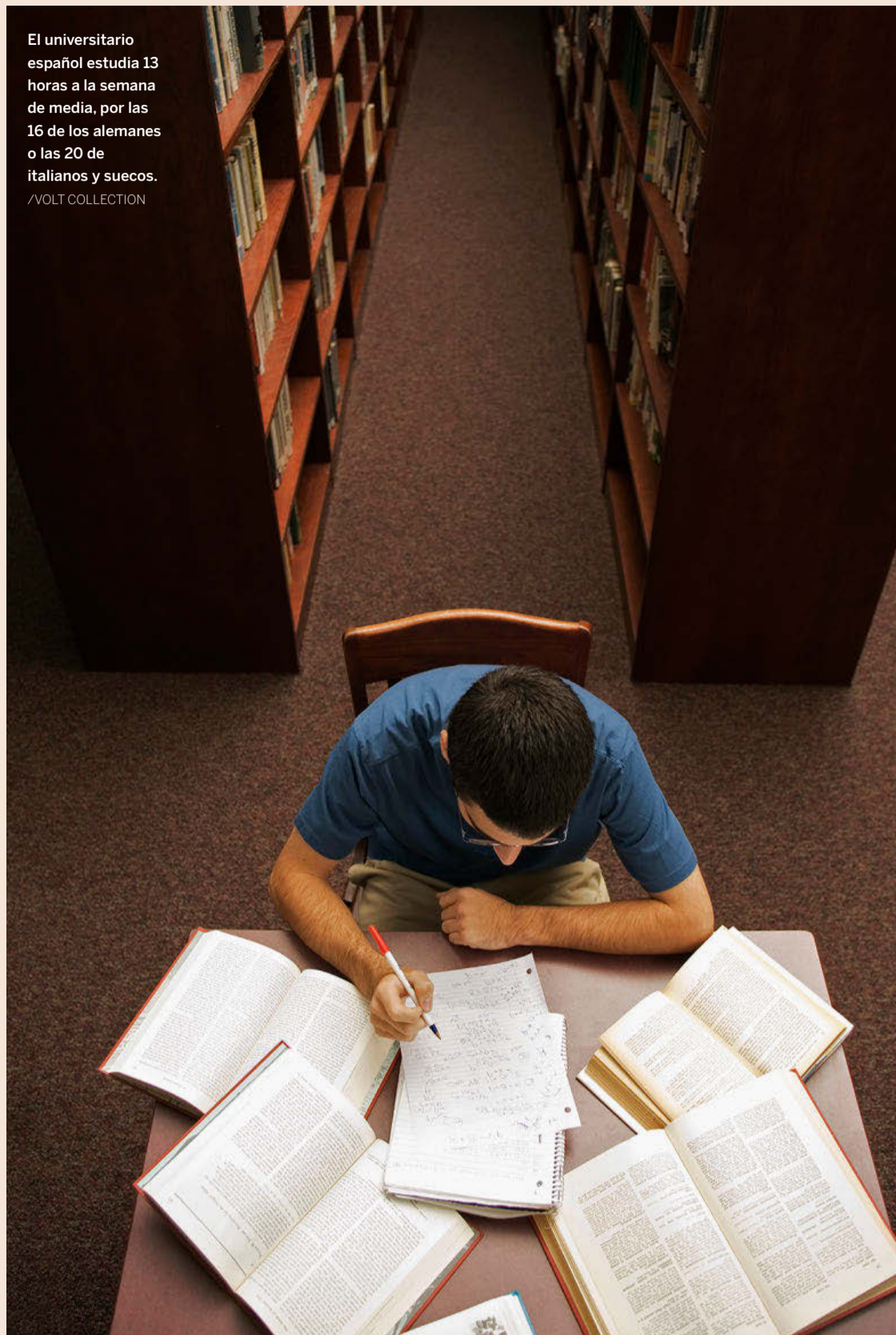
En todo caso, la *Comisión Wert* también animaba a las instituciones educativas a redoblar sus esfuerzos para captar fondos privados y reducir así su dependencia de los presupuestos públicos. Según Michavila, “el problema resulta especialmente palpable en la investigación española, donde la financiación pública se sitúa en los mismos niveles que en el resto de Europa, pero la privada apenas representa la mitad”.

Internacionalización

El último aspecto abordado por la *Comisión Wert* era hacia referencia a la necesidad de internacionalizar la universidad española. “Es necesario definir una política clara al respecto, aumentando la colaboración con las instituciones educativas de otros países, compartiendo programas, investigación y profesores, con el objetivo de atraer a más alumnos extranjeros”, tal como indica Puyol, quien considera que las escuelas de negocios serían un buen ejemplo a imitar.

Según Michavila, “la internacionalización de las universidades ha sido un eslogan durante mucho tiempo, pero no se ha entrado al fondo de la cuestión”. Descontados los estudiantes Erasmus, apenas un 2,9% de los universitarios son extranjeros, mientras que esta proporción supera el

El universitario español estudia 13 horas a la semana de media, por las 16 de los alemanes o las 20 de italianos y suecos.
/VOLT COLLECTION



50% en las principales escuelas de negocios. “Es la cifra más baja de los países del entorno y refleja que es necesario hacer más atractiva la oferta docente y estar presentes en los foros internacionales, porque nuestra patria es Europa”, añade Michavila.

La internacionalización ha cobrado especial relevancia tras la crisis, cuando el paro entre los jóvenes ha superado el 50% y ronda el 25% en el caso de la población menor de 30 años con formación universitaria. “El desempleo juvenil es un problema esencialmente español, por lo que es necesario que los jóvenes acudan a los mercados en los que se están demandando personas con formación internacional”, indica Manuel Alonso Puig, presidente de todos los campus de Schiller International University. En su opinión, “las universidades españolas han hecho un enorme esfuerzo en los últimos 30 años para sumergir a los alumnos en los mercados globales, pero aún hay un enorme ca-

España destina el 0,1% de su PIB a becas y ayudas, mientras que la media de la OCDE asciende al 0,3%

Apenas un 2,9% de los alumnos matriculados en los centros españoles procede de otros países

mino por recorrer, como demuestran las dificultades que tienen para acceder a estos mercados”.

Esta universidad norteamericana cuenta con presencia en varios puntos de EEUU, Alemania, Francia, Reino Unido y España. Cuatro son los aspectos clave para formar personas capaces de competir en el exterior, según el presidente de sus campus: “La enseñanza debe tener lugar en inglés, los alumnos tienen que ser de diferentes nacionalidades, se tiene que ofrecer la oportunidad de estudiar en varios países (para conocer sus culturas, su política y la forma en que se hacen negocios) y hay que dotar al estudiante de una estructura mental observadora y adaptativa, para que pueda entender la forma de vida de esos lugares”.

Algunas instituciones españolas también se han tomado muy en serio la necesidad de internacionalizar sus aulas. Por ejemplo, el Instituto Químico de Sarrià (IQS) “promueve los intercambios de estudiantes e investigadores con universidades extranjeras como una manera idónea de complementar sus estudios y mejorar así su proyección profesional hacia empresas de marcada orientación internacional”, explica Marta Tena, directora de Comunicación y Marketing Corporativo del centro. En su opinión, estos intercambios “permiten consolidar el aprendizaje de idiomas y fortalecer la red de contactos, con un importante componente de diversidad geográfica y cultural”, además de ofrecer “una experiencia de contacto única con equipos de investigación y con programas docentes muy útiles para su desarrollo personal y profesional”.

A punto de decir adiós a una legislatura marcada por la convulsión

■ La legislatura que está a punto de concluir pasará a la historia como una de las más convulsas de la democracia española en lo que a la vida universitaria se refiere. El Partido Popular accedió al Gobierno con el objetivo de poner en marcha unas “universidades de excelencia”, lo que requeriría de cambios en la gobernanza, la financiación, las becas y la movilidad internacional de los alumnos. Cuatro años después, casi ninguno de estos propósitos se ha cumplido y el titular del ramo durante la mayor parte de la legislatura, José Ignacio Wert, quedará para el recuerdo por los recortes presupuestarios (de 1.500 millones de euros entre 2010 y 2014), el *tasazo* de 2012 (que aumentó los ingresos del Estado en casi 2.000 millones), el hachazo a las becas (que se han reducido más de un 13%), la creación de una comisión para analizar los cambios necesarios en el sistema universitario (cuyas recomendaciones después fueron ignoradas) y el denominado *Decreto del 3+2* de 2015, por el que se permitía a

las universidades crear grados de tres años de duración que irían acompañados de másteres de dos años (modificando el sistema 4+1 por el que había optado España en 2007, cuando los países europeos tuvieron que adaptarse al Plan Bolonia). Aunque las expectativas eran muy altas, “los cambios que se han llevado a cabo han sido puntuales, meros retoques cosméticos, mientras que los grandes asuntos siguen pendientes de resolverse”, opina Rafael Puyol, presidente del Patronato de IE University e integrante del comité de sabios designado por el ministro Wert en 2013. Aún más crítico se muestra Francisco Michavila, director de la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que tacha los últimos cuatro años de “época convulsa en las relaciones del mundo universitario y el poder político”. Además, este experto observa varias “heridas abiertas”, relacionadas con la “merma del volumen de recursos disponibles, la rebaja en las expectativas

por el clima de pesimismo que se ha instalado en las universidades y la pérdida de posiciones a nivel internacional de la producción científica española”. Entre las principales críticas que se han realizado sobre la gestión de Wert, destaca la acusación de que casi cerró las puertas de la universidad a las capas sociales más bajas. Por ejemplo, la subida de las tasas “quiso trasladar parte del coste de los estudios a las familias, que antes asumían el 15% y se trató de elevar esa cifra al 25%”, opina Michavila. Curiosamente, al estar transferidas las competencias educativas a las comunidades autónomas, esta medida tuvo impacto en unas regiones (Cataluña o Madrid), pero no en otras (Andalucía y Galicia, por ejemplo, decidieron congelar el precio de los créditos). Algo similar ha sucedido con el *Decreto del 3+2*, cuya aplicación acordaron retrasar las universidades hasta 2017, a excepción de las públicas catalanas y un pequeño grupo de privadas, que empezarán a ofrecer grados de tres años de duración el próximo curso.